

Químicos sin control

Señor Director:

En medio del legítimo debate por la creciente violencia escolar en Chile, existe un flanco poco visible, que no está siendo abordado con la seriedad que requiere: la facilidad con que se puede acceder a sustancias químicas potencialmente peligrosas o a los insumos para prepararlas.

Hoy, en nuestro país, productos como el nitrato de potasio —conocido comúnmente como salitre— o ácidos de uso industrial, como el ácido sulfúrico presente en las baterías, pueden adquirirse sin mayores restricciones en comercios establecidos o incluso en línea. Si bien estos compuestos tienen usos legítimos en la agricultura, la industria o incluso en contextos educativos, también es sabido que pueden ser utilizados para fabricar artefactos explosivos caseros con relativa facilidad.

La normativa chilena vigente regula principalmente las sustancias ya elaboradas o directamente clasificadas como explosivos. Sin embargo, deja amplios vacíos respecto al control de precursores químicos, es decir, aquellos compuestos que, combinados, pueden dar origen a materiales peligrosos. A diferencia de países europeos, donde la venta de estos precursores está estrictamente regulada, en Chile su adquisición sigue siendo sorprendentemente accesible.

En un contexto, donde hemos sido testigos de episodios de violencia en comunidades escolares —algunos de ellos con planificación previa—, la disponibilidad irrestricta de estos insumos constituye un riesgo evidente. No se trata de generar alarma, sino de asumir una realidad: la prevención también pasa por restringir el acceso a los medios que pueden facilitar hechos graves.

Actualizar la legislación en esta materia no implica obstaculizar el desarrollo productivo ni la enseñanza de las ciencias, sino establecer mecanismos razonables de control, trazabilidad y responsabilidad en la venta de sustancias químicas sensibles. Tal como ocurre con otros elementos de riesgo.

¿Vamos a esperar que ocurran incidentes mayores para tomar acción? La regulación de precursores químicos tiene que dejar de ser un tema técnico de nicho.

ANDRÉS VEGA

Director Depto. Ciencias Químicas
Universidad Andrés Bello

El desafío pendiente de la gestión del Estado

Señor Director:

El último informe sobre empleo público de la Dirección de Presupuestos revela una tendencia preocupante. En una década, la dotación estatal prácticamente se duplicó, con un costo fiscal que pasó de 3,3% del PIB en 1990 a 7% en 2025, lo que equivale a US\$24.000 millones. Para dimensionar esta cifra, basta compararla con el gasto anual en salud, que alcanza los US\$9.000 millones (excluyendo el personal), o con el gasto en vivienda, que bordea los US\$4.500 millones.

Cada dólar que gasta el Estado debiera traducirse en valor público medible en bienestar para la población. Sin embargo, en materia de personal, esto es difícil de acreditar, puesto que no existe un sistema robusto de gestión de personas, evaluaciones de desempeño efectivas ni mecanismos de calificación exigentes. Persisten, en cambio, pagos de bonos a todo evento e inamovibilidades propias de un Estado del siglo XIX.

Los resultados son evidentes. Listas de espera No GES que alcanzan los 2,7 millones de personas y estancamiento en las pruebas estandarizadas de educación en los últimos 10 años. Algo estamos haciendo mal y no queremos verlo.

ÉRIC LATORRE

Director Magister en Gobierno
Universidad Autónoma de Chile

Estimados lectores, pueden enviarnos sus cartas al director a los siguientes correos:
director@diariolaprensa.cl
editorlaprensa@gmail.com
Las cartas enviadas a esta sección deben ser cortas, no exceder de un máximo de 350 palabras y consignar la individualización completa del remitente, incluyendo su número telefónico. La dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas, sustrayéndose a cualquier debate con sus corresponsales. No se devuelven las cartas que no son publicadas.